



Comparecencia del presidente Puigdemont ante el pleno del Parlamento

Barcelona, 10 de octubre de 2017

Comparezco ante este Parlamento a petición propia para presentarles los resultados del referéndum celebrado el día 1 de octubre y para explicarles las consecuencias políticas que de él se derivan. Soy consciente, como seguramente muchos de ustedes, de que hoy también comparezco ante el pueblo de Catalunya y de mucha otra gente que ha fijado su atención en lo que hoy suceda en esta cámara.

Vivimos un momento excepcional, de dimensión histórica. Sus consecuencias y efectos van mucho más allá de nuestro país y se ha evidenciado que, lejos de ser un asunto doméstico e interno, como a menudo hemos tenido que escuchar por parte de quienes han negligido su responsabilidad al no querer conocer lo que estaba sucediendo, Catalunya es un asunto europeo.

De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos. El momento es suficientemente serio como para que todos asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde en la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir, ni con la palabra ni con el gesto, a incrementarla. Al contrario, quiero dirigirme al conjunto de la población; a quienes se han movilizado los días 1 y 3 de octubre, a quienes lo hicieron el sábado en la manifestación abogando por el diálogo y a quienes lo hicieron masivamente el domingo en defensa de la unidad de España. Y a quienes no se han movilizado en ninguna de estas convocatorias. Todos, con nuestras diferencias y discrepancias, en lo que nos entendemos y en lo que no nos entendemos, formamos un mismo pueblo y lo debemos continuar siendo juntos, pase lo que pase, porque así se hace la historia de los pueblos que buscan su futuro.

Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente. Pero sí entendemos, porque ya lo hemos demostrado muchas veces, que la forma de avanzar no puede ser otra que la democracia y la paz. Que significa el respeto por el que piensa diferente y buscar cómo hacer posible las aspiraciones colectivas, dando por supuesto que ello requiere grandes dosis de diálogo i empatía.

Como se pueden imaginar, en estos últimos días y horas, se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que debía hacer o dejar de hacer. Todas son sugerencias lícitas, respetables y propias de un momento como éste. A todos a quienes he podido, se lo he agradecido, porque en cada uno de ellos he reconocido razones fundamentadas que merece la pena escuchar. También yo he pedido opinión a diversas personas, que me han ayudado a enriquecer el análisis del momento y la perspectiva de futuro, también se lo quiero agradecer de todo corazón.

Pero lo que les expondré hoy no es una decisión personal, ni una obsesión de nadie: es el resultado del 1 de octubre, de la voluntad del Gobierno que presido de haber mantenido su compromiso de convocar, organizar y celebrar el referéndum de autodeterminación, y naturalmente del análisis de los hechos posteriores que hemos



compartido en el sí del Gobierno. Hoy toca hablar de los resultados del 1 de octubre en el Parlamento y eso es lo que haremos.

Estamos aquí porque el pasado día 1 de octubre Catalunya celebró su referéndum de autodeterminación. Lo hizo en unas condiciones más que difíciles: extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que han hecho cola para depositar la papeleta. Desde las 8 de la mañana y hasta la hora del cierre de los colegios, la policía y la Guardia Civil golpearon a personas indefensas y obligaron a los servicios de emergencias a atender a más de 800 personas. Lo vimos todos, también lo vio todo el mundo, que se estremeció con las imágenes que se iban recibiendo.

El objetivo no era sólo confiscar urnas y papeletas. El objetivo era provocar el pánico generalizado y que la gente, viendo las imágenes de violencia policial indiscriminada, se quedase en casa i renunciase a su derecho de voto. Pero a los responsables políticos de esta ignominia les salió el tiro por la culata. 2.286.217 ciudadanos vencieron el miedo, salieron de casa y votaron. No sabemos cuántos lo intentaron sin éxito, pero sí sabemos que los colegios clausurados violentamente representan un censo de 770.000 personas más.

Más de dos millones doscientos mil catalanes pudieron votar porque vencieron el miedo, y también porque cuando llegaron a su colegio encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Las operaciones y registros policiales de las semanas anteriores en busca de urnas y papeletas no impidieron el referéndum. Las detenciones de altos cargos y funcionarios del Gobierno tampoco impidieron el referéndum. Las escuchas telefónicas, los seguimientos de personas, los ataques informáticos, el cierre de 140 webs, las violaciones de la correspondencia, tampoco impidieron el referéndum. Repito: a pesar del esfuerzo y los recursos destinados para combatirlo, cuando los ciudadanos llegaron a los colegios electorales, encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo.

Quiero hacer, por tanto, un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este éxito logístico y político. A los voluntarios que durmieron en las escuelas. A los ciudadanos que guardaron las urnas en casa. A los impresores que imprimieron las papeletas. A los informáticos que idearon y desarrollaron el sistema de censo universal. A los trabajadores y las trabajadoras del Gobierno. A los votantes del Sí y a los del No, y a los del voto en blanco. A tantísima gente anónima que puso su granito de arena para hacerlo posible. Y sobre todo, quiero enviar mi afecto, mi solidaridad y mi calor a todos los heridos y maltratados por la operación policial. Las imágenes quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre. Nunca lo olvidaremos.

Cabe reconocer, y denunciar, que la actuación del Estado ha conseguido introducir tensión e inquietud en la sociedad catalana. Como Presidente de Catalunya, soy muy consciente de que en estos momentos hay mucha gente preocupada, angustiada,



incluso asustada por lo que está pasando y por lo que puede pasar. Gente de todas las ideas y tendencias. La violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social, una decisión, déjenme decir, más de relato para los mercados que no con efectos reales sobre nuestra economía (lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía son los 16.000 millones de euros catalanes que están obligados a cambiar de sede social cada año), sin duda son hechos que han enturbiado el ambiente. A todas esas personas que tienen miedo, les quiero enviar un mensaje de comprensión y empatía, y también de serenidad y tranquilidad: el Gobierno de Catalunya no se desviará ni un milímetro de su compromiso con el progreso social y económico, la democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto a la discrepancia y la voluntad negociadora. Como Presidente actuaré siempre con responsabilidad y teniendo en cuenta a los 7,5 millones de ciudadanos del país.

Querría explicar dónde estamos, y sobre todo por qué estamos donde estamos. Hoy todo el mundo nos mira, y sobre todo, hoy que el mundo nos escucha, creo que vale la pena volvernos a explicar.

Desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, Catalunya ha contribuido tanto como el que más a la consolidación de la democracia española. Catalunya no ha sido solo el motor económico de España, sino también un factor de modernización y de estabilidad. Catalunya creyó que la Constitución española de 1978 podía ser un buen punto de partida para garantizar su autogobierno y su progreso material. Catalunya se implicó a fondo en la operación del regreso del estado español a las instituciones europeas e internacionales después de 40 años de aislamiento y autarquía.

El paso de los años, sin embargo, permitió constatar que el nuevo edificio institucional surgido de la Transición, que en Catalunya se veía como un punto de partida desde el cual evolucionar hacia cotas más altas de democracia y de autogobierno, las élites hegemónicas del estado lo entendían no como un punto de partida, sino como un punto de llegada-con el paso de los años, el sistema no solo dejó de evolucionar en la dirección deseada por el pueblo de Catalunya, sino que empezó a involucionar.

En coherencia con esta constatación, en el año 2005, una gran mayoría, el 88% de este Parlamento, repito, una mayoría del 88% de este Parlamento, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, repito, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, aprobó una propuesta del nuevo estatuto de Autonomía, y la envió al Congreso de los Diputados. La propuesta catalana desató una campaña de auténtica catalanofobia, atizada de forma irresponsable por quienes querían gobernar España al precio que fuera.

El texto que finalmente se sometió a referéndum en el año 2006 ya era muy diferente de la propuesta inicial del Parlamento de Catalunya, pero aún así fue aprobado por los ciudadanos que fueron a votar. La participación fue de un 47% del censo, y los votos favorables al Estatut fueron 1.899.897. Quiero remarcar que son 145.000 votos menos que el Sí a la independencia del 1 de octubre.



El estado, sin embargo, no tuvo suficiente con el primer recorte. En 2010, cuatro años después de la entrada en vigor del Estatut recortado, un Tribunal Constitucional formado por magistrados elegidos por los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, emitió una sentencia de infausto recuerdo que recortaba el Estatut por segunda vez, y modificaba el contenido que ya había sido votado por el pueblo en referéndum.

Conviene recordarlo, y subrayarlo. A pesar de haber seguido los procedimientos previstos en la Constitución, a pesar de tener el respaldo de un 88% del Parlamento de Catalunya, y a pesar del voto popular en referéndum, legal y acordado, la acción combinada del Congreso de Diputados y del Tribunal Constitucional convirtieron la propuesta catalana en un texto irreconocible, doblemente recortado y no refrendado por los catalanes, es la ley vigente actualmente. Este ha sido el resultado del último intento de Catalunya de modificar su estatus jurídico-político por las vías constitucionales, es decir, una humillación

Pero eso no es todo. Desde la sentencia del TC contra el Estatut votado por el pueblo, el sistema político español no solo no ha movido un dedo para intentar dar marcha atrás y reparar la rotura, sino que ha activado un programa agresivo y sistemático de recentralización. Desde el punto de vista del autogobierno, los últimos siete años han sido los peores de los últimos cuarenta: laminación continuada de competencias a través de decretos, leyes y sentencias; desatención y desinversión en el sistema básico de infraestructuras de Catalunya, pieza clave del progreso económico del país; y un menosprecio hiriente hacia la lengua, la cultura y la forma de ser y de vivir en nuestro país.

Todo lo que explico condensadamente en unas pocas líneas, ha tenido un impacto profundo en la sociedad catalana. Hasta el punto que durante este período muchos ciudadanos, millones de ciudadanos, han llegado a la conclusión racional de que la única manera de garantizar la supervivencia, no solo del autogobierno, sino de nuestros valores como sociedad, es que Catalunya se constituya en un estado. Los resultados de las últimas elecciones al Parlamento de Catalunya son el testimonio de ello.

Además, ha pasado una cosa más relevante: y es que paralelamente a la formación de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento, se ha forjado un consenso amplísimo y transversal entorno a la idea de que el futuro de Catalunya, fuera el que fuese, debía ser decidido por los catalanes, democrática y pacíficamente, a través de un referéndum. De hecho, en la encuesta más reciente de un importante periódico de Madrid, no de aquí, de Madrid, un 82% de los catalanes así lo expresa.

Con el objetivo de hacer posible este referéndum, en los últimos años, las instituciones y la sociedad civil catalanas han puesto en marcha numerosas iniciativas ante el gobierno y las instituciones españolas. Está todo documentado: hasta 18 veces, y en todos los formatos posibles, se ha pedido abrir un diálogo para acordar un referéndum como el que se celebró en Escocia el 18 de septiembre del 2014. Un referéndum con una fecha y una pregunta acordadas entre las dos partes, en el que las dos partes pudieran hacer campaña y exponer sus argumentos, y en el que las dos partes se



comprometieran a aceptar y aplicar el resultado a través de una negociación que protegiera los intereses respectivos. Si ello se había podido hacer en una de las democracias más antiguas, consolidadas y ejemplares del mundo, como es el Reino Unido, ¿por qué no se podía hacer también en España?

La respuesta a todas estas iniciativas ha sido una negativa radical y absoluta, combinada con la persecución policial y judicial de las autoridades catalanas. El expresidente Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau, así como el exconseller de la Presidencia Francesc Homs, han sido inhabilitados por haber promovido un proceso participativo no vinculante y sin efectos jurídicos el 9 de noviembre de 2014. Y no solo inhabilitados, sino multados de forma arbitraria y abusiva: si no depositan más de 5 millones de euros en el Tribunal de Cuentas español, todos sus bienes serán embargados y ellos y sus familias podrán verse afectados.

Además de ellos, la Mesa de este Parlamento y decenas de cargos electos municipales han sido querellados por expresar su apoyo al derecho a decidir y permitir debates sobre el referéndum. Se han presentado querellas contra la presidenta i la mesa del parlamento por no permitir que el Parlamento pudiera debatir. La última ola represiva contra las instituciones catalanas ha implicado la detención y traslado a dependencias policiales de 16 cargos y servidores públicos del Gobierno de Catalunya, que tuvieron que declarar esposados y sin ser informados de cuál era la acusación que pesaba sobre ellos. El mundo también debe saber que los líderes de las entidades que han liderado las manifestaciones más masivas y a la vez pacíficas de la historia de Europa están imputados por un delito de sedición que puede comportar hasta 15 años de prisión. Los responsables que han organizado manifestaciones que han maravillado al mundo por su civismo y sin incidentes.

Esta ha sido la respuesta del estado español a las demandas catalanas, que siempre se han expresado de forma pacífica y a través de las mayorías obtenidas en las urnas. El pueblo de Catalunya reclama desde hace años la libertad para poder decidir. Es bien sencillo. Sin embargo, no hemos encontrado interlocutores en el pasado ni los estamos encontrando en el presente. No hay ninguna institución del estado que se abra a hablar de la demanda mayoritaria de este Parlamento y de la sociedad catalana. La última esperanza que podía quedar era que la monarquía ejerciera el papel arbitral y moderador que la Constitución le atribuye, pero el discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis.

Quiero dirigirme ahora a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y respeto, de voluntad de diálogo y acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo, por el bien de todos; un esfuerzo por conocer y reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes, ni unos locos, ni unos golpistas, ni unos abducidos: somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles.



Al contrario. Nos queremos reentender mejor, y ese es el deseo mayoritario que existe en Catalunya. Porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado, contra su voluntad, a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere. La Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución.

Señoras y señores, con los resultados del referéndum del 1 de octubre pasado, Catalunya se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente, y se ha ganado el derecho a ser escuchada y respetada. Y debo decir que escuchada, últimamente, ya se da más, porque lo que ha pasado en estos días en este terreno no había pasado en años. Y hoy Catalunya es escuchada y respetada más allá de nuestras fronteras.

El sí a la independencia ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta, y dos años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de golpes de porra. Las urnas, el único lenguaje que entendemos, dicen sí a la independencia. Y éste es el camino que estoy comprometido a transitar.

Como es conocido, la Ley de Referéndum establece que, dos días después de la proclamación oficial de los resultados, y en caso de que el número de votos del Sí haya sido superior al número de votos del No, el Parlamento (y cito textualmente de la ley) “celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Catalunya, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”.

Hay un antes y un después del 1 de octubre, y hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al inicio de la legislatura.

Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat asumo al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato de que Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república.

Hoy corresponde hacerlo. Por responsabilidad y por respeto.

Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que durante las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento pide no solo la desescalada en la tensión sino sobre todo voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Catalunya a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que hemos de tener en cuenta, de manera imprescindible, en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir.

Es conocido que desde el mismo día posterior al referéndum se han puesto en marcha diferentes iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación a nivel nacional, estatal e internacional. Algunas de éstas son públicas y otras todavía no lo son. Todas



son muy serias, y eran difíciles de imaginar hasta hace poco. Los llamamientos al diálogo y a la no violencia se han oído desde todos los rincones del planeta; la declaración de ayer del grupo de ocho Premios Nobel de la Paz; la declaración de The Elders, al frente del cual está el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan y del que forman parte personalidades de gran relevancia mundial; los posicionamientos de presidentes y primeros ministros de países europeos... hay un ruego de diálogo que recorre Europa, porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces merecen ser escuchadas. Y todas, sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar la oportunidad al diálogo con el Estado español.

Hoy también corresponde hacer esto. Por responsabilidad y por respeto.

Acabo. Y lo hago apelando a la responsabilidad de todos. A los ciudadanos de Catalunya les pido que sigan expresándose como lo han hecho hasta ahora, con libertad y con respeto a los que piensan diferente. A las empresas y actores económicos, les pido que sigan generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su poder para amedrentar a la población. A las fuerzas políticas, les pido que contribuyan con sus palabras y con sus acciones a rebajar la tensión. También lo pido a los medios de comunicación. Al gobierno español le pido que escuche, ya no a nosotros si no quiere, sino a los que advocan por la mediación y a la comunidad internacional y a los millones de ciudadanos de todas partes de España que le piden que renuncie a la represión y a la imposición. A la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que vele por los valores fundacionales de la Unión.

Hoy el Gobierno de Catalunya hace un gesto de responsabilidad y generosidad, y vuelve a tender la mano al diálogo. Estoy convencido de que, si durante los próximos días todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones, el conflicto entre Catalunya y el estado español se puede resolver de manera serena y acordada, y respetando la voluntad de los ciudadanos. Por nosotros no quedará. Porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos aquellos que han sufrido y se han sacrificado, y porque queremos un futuro digno para nuestros hijos e hijas, para toda aquella gente que quiera hacer de Catalunya su tierra de acogida y de esperanza.

Muchas gracias

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya